

X Jornadas de Sociología de la UNLP 5, 6 y 7 de diciembre de 2018

Organiza: Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP)

Nombre y Apellido: Christian Carlos Hernán Castillo y Esteban Mercatante

Pertenencia Institucional: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación / Facultad de Trabajo Social (UNLP) y Facultad de Ciencias Sociales (UBA); Facultad de Ciencias Económicas (UBA).

Correo Electrónico: chcastillo2002@yahoo.com.ar ; esteban1870@gmail.com

TÍTULO: LAS CAUSAS DE LA DECADENCIA NACIONAL Y LAS FALACIAS NEOLIBERALES

RESUMEN

Es habitual escuchar a los economistas neoliberales argumentar que Argentina está en crisis porque “gasta más de los ingresos que genera” y, por lo tanto, no hay salida sin la baja de lo que ellos llaman “el gasto público”. Este diagnóstico, repetido hasta el hartazgo en los medios de comunicación, tiene como finalidad legitimar el “ajuste” que está realizando en nuestro país el gobierno encabezado por Mauricio Macri, que se ha visto reforzado a partir del acuerdo realizado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En lógica, una falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es. En este trabajo vamos a demostrar que dicho diagnóstico presenta una serie de falacias que ocultan lo que postularemos como las causas reales de la decadencia nacional, si comparamos lo ocurrido desde la dictadura militar en adelante. Entre estas causas veremos el papel que juega la deuda pública, la fuga endémica de capitales, la apropiación del grueso de la renta agraria por unos pocos miles de grandes propietarios y capitalistas agrarios y la continuidad del sector energético en manos de concesionarios privados.

PONENCIA

Como señaló tempranamente Marx, los economistas liberales proceden como teólogos de una suerte de religión laica cuyos principios buscan, ante todo, naturalizar la desigualdad social generada por el orden capitalista. En *Miseria de la Filosofía* señalaba:

Los economistas tienen una manera singular de proceder. Para ellos no hay más que dos tipos de instituciones, las artificiales y las naturales (...) En esto se parecen a los teólogos, que, también ellos, establecen dos tipos de religiones. Cualquier religión que no es la suya es una invención de los hombres (...) Al decir que las relaciones actuales – las relaciones de la producción burguesa- son naturales, los economistas dan a entender que se trata de las relaciones en las cuales se crea la riqueza y se desarrollan las fuerzas productivas con arreglo a las leyes de la naturaleza. En consecuencia, esas relaciones son a su vez leyes naturales independientes de la influencia del tiempo. Se trata de leyes eternas que siempre deben regir la sociedad¹.

El liberalismo del siglo XVIII consideraba al individuo atomizado como punto de partida para explicar la sociedad. Esta visión, que era consecuencia a la vez de la disolución de las formas feudales y del desarrollo de las nuevas fuerzas productivas desde el siglo XVI, ponía al individuo como comienzo de la historia y no como un producto de su desenlace. Sin embargo, como señala Marx,

la época que asistió al nacimiento de esta concepción, esta idea del individuo en singular, es precisamente aquella en que las relaciones sociales (...) alcanzaron su mayor desarrollo. El hombre es (...) no solo un animal social, sino un animal que no puede individualizarse sino en la sociedad. La idea de una producción realizada por un individuo aislado, que viva fuera de la sociedad –hecho raro que bien puede ocurrir a un hombre civilizado, extraviado por azar en una comarca salvaje y que virtualmente posea las fuerzas de la sociedad- no es menos absurda que la de un desarrollo del lenguaje sin hombres que vivan y hablen juntos².

Lo insólito es que en pleno siglo XXI los liberales se siguen basando en esta visión del individuo atomista como punto de partida de la historia y la sociedad, una concepción superada no solo por el marxismo sino por las más variadas corrientes dentro de la teoría

¹ Karl Marx, *Miseria de la Filosofía*, Siglo XXI Editores, México, 1987, pág. 77.

² Karl Marx, *Introducción general a la crítica de la economía política*, Siglo XXI Editores, México, 1989, págs. 33 y 34.

social de los siglos XIX y XX. Recordemos que aún una teoría tan propia del capitalismo estadounidense del siglo pasado como el estructural funcionalismo de Talcott Parsons se desarrolló a partir de lo que consideraba la necesidad de superar la concepción del utilitarismo de la acción humana propia del liberalismo decimonónico, a la que juzgaba completamente unilateral e ingenua. Sin embargo, los economistas liberales de hoy, haciendo caso omiso a toda crítica, continúan apoyando una concepción del “homo economicus” que no resiste el menor análisis ni histórico ni sociológico.

Pero no este el único dogma que sostienen. Con el auge del neoliberalismo construyeron toda una serie de *clichés* mediante los cuales, con la intervención destacada de los organismos financieros internacionales, favorecieron la aplicación de medidas económicas (como las desregulaciones financieras, la baja de impuestos a las empresas y múltiples formas de precarización laboral) que incrementaron a niveles inéditos los negocios especulativos del capital, la desigualdad social y el poderío de las grandes empresas multinacionales.

Este repertorio de planteos sacralizados sin base empírica lo estamos escuchando hoy ante el hartazgo para dar cuenta de la decadencia de la economía nacional y sus crisis recurrentes.

Las usinas del pensamiento liberal y sus voceros políticos repiten una y otra vez que la crisis de la economía argentina es producto de que “gastamos más de lo que generamos” y que el “equilibrio de las cuentas fiscales” y el “déficit cero” son los objetivos a partir de los cuales comenzaría un ciclo de crecimiento económico persistente.

Tomemos al azar uno de los tantos discursos donde Mauricio Macri recurre a este planteo: “Cuando prometemos que vamos a achicar el problema del déficit, que los mercados lo discuten, les decimos sí, lo vamos a hacer (...) Si resolvemos eso, el crecimiento es ilimitado, es infinito porque nuestra capacidad, talento, creatividad son enormes”³.

El Fondo Monetario Internacional, en un texto que detalla los objetivos del Acuerdo Stand-by firmado en el mes de junio de 2018 con nuestro país, plantea la misma lógica:

Un objetivo central es reducir el déficit fiscal. ¿Cómo lo logrará el Gobierno?

Sí, la meta del Gobierno es lograr un balance primario equilibrado, es decir, un balance de ingresos y gastos a nivel federal que no incluya el pago de intereses, para el año 2020. Eso es un año antes de lo anunciado originalmente por el

³ Macri: “Cumpliremos esta vez en reducir el déficit”, La Nación, 30-06-2018. Disponible en <https://www.lanacion.com.ar/2148930-macri-cumpliremos-esta-vez-en-reducir-el-deficit>

Gobierno y se basa en medidas que apuntan a reducir el gasto del Gobierno federal. Estas medidas incluyen, por ejemplo, nuevos recortes en los subsidios energéticos, **un gasto salarial menor** (resaltado nuestro) y una reducción de las transferencias tanto a las provincias como a las empresas estatales.

También hay algunas medidas fiscales —en particular, la suspensión de los recortes fiscales que se habían anunciado anteriormente—, pero solo representan una pequeña parte del reequilibrio fiscal⁴.

La falta de equilibrio fiscal sería la razón para una emisión monetaria sin control (la “maquinita”) y esto a la vez la causa de la alta inflación. Incluso recientemente el macrismo ha incorporado a su relato que “que la crisis viene desde hace 70 años”, como si la misma fuera producto de los derechos sociales que los trabajadores conquistaron bajo el primer peronismo. Sin aguinaldo, sin vacaciones, sin sindicalización masiva, sin acceso a la vivienda, seguro que estábamos bárbaro...

El ordenamiento de la política económica alrededor de terminar con el déficit fiscal primario se transformó en una suerte de “principio” de la mano de los avances del neoliberalismo. Desde el FMI, el Banco Mundial y otros organismos internacionales se elaboraron miles de documentos sosteniendo este planteo, que vale para todos los países... menos para los Estados Unidos, el país con mayor déficit fiscal del mundo (que ronda el billón de dólares) sin que este hecho influya en sus niveles inflacionarios⁵. El objetivo real de aplicar este criterio no es el “crecimiento económico sobre bases sustentables” sino que la prioridad de toda la política económica sea el pago de deuda, reasignando a ese fin partidas que podrían estar destinadas a otras áreas (salud, educación, obra pública, vivienda popular, etc.). Es decir, salvaguardar ante todo el interés de los bancos y los especuladores. Esto se expresa aún en la forma en que se muestran las cuentas nacionales, donde el “resultado fiscal primario” se calcula excluyendo los pagos de intereses de la deuda pública. Por ejemplo, el proyectado “déficit cero” para 2019 por parte del Ministerio de Hacienda argentino, que reduce las partidas en todos los rubros sociales y en obra pública, consagra a la vez un crecimiento del 47% en los recursos destinados al pago de intereses de la deuda pública, hasta alrededor de \$ 500.000 millones, un

⁴ Fondo Monetario Internacional, *La recuperación económica de Argentina: Ocho respuestas para explicar el plan*, 13 de julio de 2018. Disponible en <https://www.imf.org/es/News/Articles/2018/06/29/na062918-argentinas-economic-recovery-8-answers-to-explain-the-plan>

⁵ El caso estadounidense, nada menos que la primera economía del planeta, alcanzaría para desmentir la relación mecánica que establecen los monetaristas entre déficit fiscal, emisión monetaria e inflación.

3,2% del PBI. Al mismo tiempo, las “reformas estructurales” que también son parte inseparable de los programas del FMI apuntan a reducir el “costo del Estado” para la clase capitalista: reducción de impuestos al capital y la riqueza acompañados de redobladas exigencias de baja del gasto, reformas previsionales que reducen aportes patronales y extienden la edad jubilatoria, privatizaciones que abren negocios al capital privado, etc., junto con reformas laborales precarizadoras.

Como es sabido, las políticas neoliberales fueron implementadas inicialmente en el Chile de Pinochet y en la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos, de la cual los bancos tomaron directamente el control a mediados de los '70. Luego, con la llegada de Reagan y Thatcher al poder el neoliberalismo se generalizó yendo, en una suerte de inversión del planteo maoísta, del centro a la periferia.

En los Estados Unidos el comienzo de las políticas neoliberales tuvieron un punto de partida con el cambio de política monetaria implementado por la Reserva Federal, aún estando James Carter en la presidencia. David Harvey señala:

En octubre de 1979, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos durante el mandato del presidente Carter, Paul Volcker, maquinó una transformación de la política monetaria estadounidense. El antiguo compromiso del Estado liberal democrático estadounidense con los principios del New Deal, que en términos generales implicaba políticas fiscales y monetarias keynesianas que tenían el pleno empleo como objetivo primordial, fue abandonado para ceder el paso a una política concebida para sofocar la inflación con independencia de las consecuencias que pudiera tener sobre el empleo. El tipo de interés real, que a menudo había sido negativo durante la cresta inflacionaria de dos dígitos de la década del '70, se tornó positivo por orden de la Reserva Federal. El tipo de interés nominal subió de un día para el otro y, tras oscilaciones benignas, en julio de 1981 se mantuvo en torno al 20%. De este modo, comenzó una larga y profunda recesión que vaciaría las fábricas y resquebrajaría los sindicatos en Estados Unidos y llevaría al borde la insolvencia a los países deudores, iniciándose la larga era del ajuste estructural⁶.

Pero el shock recesivo de Volcker era condición necesaria pero no suficiente para la implementación de las políticas neoliberales. Su accionar se vio complementado con la llegada a la presidencia de Ronald Reagan en 1980, cuyos consejeros estaban convencidos

⁶

David Harvey, *Breve historia del neoliberalismo*, Ediciones Akal, Madrid, 2007, pág. 29 y 30.

que el camino iniciado por Volcker, a quien el ex gobernador de California confirmó en su puesto, era el correcto. Reagan impulsó la desregulación económica, la rebaja de impuestos, recortes presupuestarios y atacó el poder de los sindicatos. En una década, el salario mínimo federal, que se mantenía cercano al nivel de pobreza en 1980 descendió un 30% por debajo de esa línea para 1990, comenzando de conjunto un proceso de descenso prolongado del salario real. A la vez aumentó fuertemente los gastos militares, combinando el neoliberalismo más rancio con lo que algunos han denominado como “keynesianismo militar”.

En la expansión internacional de las políticas neoliberales tuvo un papel relevante la asociación entre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con el FMI para imponer la reestructuración de las deudas de los países periféricos luego de la crisis de la deuda mexicana en 1982. Junto con el Banco Mundial, el FMI fue un activo promotor y ejecutor de las políticas de “fundamentalismo de libre mercado” y de la “ortodoxia neoliberal”. Las deudas eran reprogramadas a cambio de reformas institucionales que incluían el recorte del gasto social, flexibilización del mercado de trabajo y privatizaciones.

El salto en la introducción de las políticas neoliberales en nuestro país está directamente ligado con esos procesos. La dictadura militar impuso una política económica que favoreció la depresión de los salarios y un festival de negocios especulativos para el capital (con el auge de la llamada “patria financiera”) y de endeudamiento externo. En los siete años de dictadura, la deuda externa aumentó de USD 8.000 millones a USD 45.000 millones. Este incremento se debió en gran medida a la estatización de la deuda privada de los grupos económicos locales y extranjeros, entre ellos el Grupo Macri, implementada al final de la misma por Domingo Cavallo, que estaba al frente del Banco Central de la República Argentina. Entre los bancos que otorgaron créditos en estos años se cuentan el Lloyd’s Bank International Ltd., el Citibank N.A., el Morgan Guaranty Trust Co., el Manufacturers Hannover Trust Co., el Chase Manhattan Bank N.A., el European Banking Co. Ltd., el Bank of Tokyo, el Libra Bank Ltd. Y el Bank of Montreal⁷. El juez Ballesteros detectó al menos 477 operaciones ilegales ocurridas en este proceso de endeudamiento, según consta en la causa emblemática iniciada a partir la denuncia presentada por Alejandro Olmos. A pesar de ello, ninguna consecuencia sufrieron los grupos económicos beneficiados con tales medidas ilegales.

⁷ Juan Pablo Bohoslavsky, “Complicidad de los prestamistas”, en Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky, *Cuentas Pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura*, Siglo XXI editores, 2013, Buenos Aires, Argentina, pág. 121.

Señalar este punto de inflexión en los niveles de endeudamiento externo en la Argentina reciente es central porque desmantela el argumento de los economistas liberales de que la deuda es producto del “exceso de gasto público”. Por el contrario, el ciclo de endeudamiento permanente, en el que todavía estamos, surgió “socializando” la deuda de los grupos económicos, para solventar sus ingresos y los de los bancos acreedores, así como la fuga de capitales al exterior.

Por ello sostendremos, a contrapelo de los “teólogos” liberales, que las causas de la decadencia nacional no están en lo que se pagan en jubilaciones o en salarios del sector público ni lo que se destina a salud, educación, obra pública o vivienda sino que deben buscarse en la continuidad del pago de una deuda pública ilegal y fraudulenta, en la fuga persistente de capitales, en la apropiación de la renta y el capital agrario por un puñado de grandes propietarios y corporaciones exportadoras, y en la entrega al capital privado de recursos económicos estratégicos como los hidrocarbúricos y las empresas de servicios públicos privatizadas en los ‘90.

Partamos del hecho que la decadencia nacional es innegable. En 1950 Argentina ocupaba el puesto 8° a nivel mundial en cuanto al PBI per cápita. Era de USD 4.987 frente a USD 9.561 de los Estados Unidos, que estaba en el primer puesto de la escala. Para 2010 había descendido al lugar 59°, con un PBI per cápita de USD 9.124 frente a uno de USD 47.153 de los EE. UU. (tercero en la tabla). En el mismo período Brasil pasó de un PBI per cápita de USD 1.672 a uno de USD 10.710. Y esto no es para embellecer a la burguesía del país vecino, tan corrupta y presta a entregarse al capital imperialista como la nuestra, sino para graficar la profundidad del retroceso, que se ha acelerado desde la imposición de la dictadura genocida a nuestros días. Para 2016 el PBI per cápita, de acuerdo con el FMI, era de unos USD 12.502, cifra hoy en caída por la fuerte devaluación sufrida por el peso desde entonces.

De acuerdo a estimaciones sobre la evolución de largo plazo del poder adquisitivo del salario, el mismo es hoy poco más de la mitad del que llegó a tener en 1974. La desocupación entonces era de solo un 2,7 % cuando hoy supera el 9 %. El trabajo no registrado se ha elevado hasta un 35 % de la fuerza de trabajo ocupada (en 1974 abarcaba solo a un 20 % de los asalariados y a un 15 % del total de los empleados), y las diversas formas de trabajo precario (incluyendo la del empleo formal) engloban a más de un 60 % de los trabajadores⁸. La población en situación de pobreza (medida en términos de ingresos para acceder a una

⁸ Horacio Chitarroni, Ana Kukurutz y Daniela Ruiz, *El perfil del empleo no registrado: Las transformaciones ocurridas a lo largo de tres décadas*, ponencia presentada al 9° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, 2009.

canasta básica) llega al menos a un 25,7 % (cuando en 1974 no llegaba al 4 %) y la que se encuentra en situación de indigencia al 4,5 %. En los niños y jóvenes la pobreza llega a un alarmante 39,7 %. Si se mide en términos cualitativos (agua corriente, red de gas, desagües pluviales, cloacas y calles pavimentadas) el porcentaje es muy superior. Y estas cifras son antes de medir los efectos de las medidas de ajuste de este año.

Consideremos entonces cuáles son desde nuestro punto de vista aspectos centrales que explican la decadencia nacional: una deuda pública impagable; la fuga sistemática de capitales; el control privado oligopólico del comercio exterior y el acaparamiento de la renta y la ganancia agraria por un puñado de grandes propietarios y productores agrarios y las exportadoras. A estas cuestiones debemos agregar el control de los recursos energéticos por monopolios nacionales y extranjeros así como la continuidad en manos privadas de empresas de servicios públicos esenciales, como el gas y la energía eléctrica, puntos que no desarrollaremos por una cuestión de espacio.

La deuda pública: memoria del saqueo

El pensamiento económico burgués se limita a tratar la deuda pública como una de las opciones que tiene el tesoro para cubrir sus gastos. En vez de aumentar impuestos hoy, puede tomar deuda y pagarlo con la recaudación de mañana. Aunque el enfoque fiscalista de la ortodoxia dominante apunta a un presupuesto público “austero” y preferentemente superavitario, limitando todo gasto “social”, no establece una diferencia significativa entre una u otra forma de cubrir el gasto.

Pero esta noción vela el hecho de que, por la “magia” del interés compuesto, la deuda se convierte en una carga perpetua por la cual los tenedores de bonos de deuda reciben una riqueza formidable de manos del Estado muy superior al monto del crédito inicial.

No sólo esto; la deuda pública en los países dependientes es además un mecanismo por el cual unos pocos centros financieros localizados en las potencias imperialistas expolían a todo el planeta. Es cierto que todas las naciones, incluyendo las imperialistas, emiten deuda para solventar el desenvolvimiento del Estado, y también que las crisis de deuda suelen ocurrir en todas partes, ya que son resultado del espiral de crecimiento de la deuda por el efecto de los intereses que multiplica el valor de los pasivos hasta volverlos insostenibles, para enriquecimiento de los acreedores (que por regla general cuando sobreviene un default se cobraron con creces el capital adelantado, lo que no obsta que realicen rapaces reclamos por

resarcimiento a causa del impago). Pero para tener alguna idea de las diferencias, el default con el FMI en el que cayó Grecia hace unos años fue el primero de un país europeo con el organismo, así como el único de un país europeo registrado desde finalizada la Segunda Guerra Mundial (hubo default de ciudades como Nueva York, pero no de Estados nacionales imperialistas). Como se ve, un desempeño muy distinto del de las economías dependientes como la nuestra. En los países semicoloniales y dependientes, en cambio, la deuda externa (es decir, con acreedores extranjeros y en moneda de reserva internacional como el dólar, euro, o yen) ha conducido a crisis agudas y recurrentes en el mismo período.

A diferencia de economías dominantes con importante deuda pública, como EE. UU., que acumulan pasivos en su propia moneda, los países dependientes dependen del financiamiento en moneda extranjera, por las debilidades de su estructura económica que convierte su moneda en intrínsecamente frágil, el peso del capital extranjero y el desarrollo limitado del sistema de crédito. Esto convierte al capital dinerario que circula internacionalmente en una fuente de financiamiento privilegiada. La deuda externa no solo financia al tesoro sino que compensa los desbalances externos, es decir, el déficit en divisas ocasionado por un comercio exterior deficitario o por la sangría de las remesas al exterior de empresas extranjeras o de sectores de la burguesía local. El crédito sostiene el drenaje de divisas por estas múltiples vías y contribuye al mismo, por el peso de los intereses, hasta que termina transformándose en un peso insoportable sobre la economía.

La deuda es tanto resultado de la condición dependiente de una formación capitalista como la argentina, como mecanismo de su perpetuación. La deuda reemerge una y otra vez como problema porque sus raíces están en las condiciones de valorización de capital en el país y en las relaciones que de ahí surgen entre la burguesía local y el capital financiero internacional.

Como señalamos, el salto en calidad de la deuda pública argentina se remonta al golpe genocida de 1976. En el crecimiento del endeudamiento público y externo iniciado entonces convergieron los intereses de la banca internacional, que tenía abundante liquidez gracias a los “petrodólares”, y los de los grandes grupos económicos locales que solventaron así la bicicleta financiera que permitió una formidable creación de riqueza ficticia (que se transformó en quebrantos bien reales que fueron socializados) y la fuga de activos. Durante la dictadura creció el endeudamiento privado, que alcanzó los USD 17.000 millones en 1981 y luego se transformaría en público gracias al Banco Central. En paralelo, la dictadura emitía deuda para crear una bonanza ficticia manteniendo sobrevaluada la moneda local. A

comienzos de los años ochenta la suba de tasas de interés en EE. UU. cortó la liquidez y disparó el costo de la deuda en todo el mundo. La política de peso fuerte de la dictadura se derrumbó y sobrevino una fuerte devaluación. Poco antes, cuando ya se avizoraba esta dinámica el Ministro de Economía de entonces, Lorenzo Sigaut, había pronunciado una de esas frases que quedan grabadas en la memoria nacional: “el que apuesta al dólar pierde”. El Banco Central comandado por Domingo Cavallo, otorgó “seguros de cambio” retroactivos a las deudas privadas, que se estatizaron. La deuda pública, que en 1976 era de USD 8.000 millones, para 1982 era de USD 45.000 millones.

Desde entonces la Argentina atravesó tres crisis de deuda pública que terminaron en reestructuraciones: con el plan Baker en 1985, surgido como respuesta a las crisis de deuda de toda América Latina; el plan Brady ante la nueva crisis regional disparada en 1989; y el default de 2001, con la posterior renegociación en 2005 y 2010. En todos los casos las crisis se dieron en varios países América Latina en simultáneo, pero cada país negoció separadamente con los acreedores. Alfonsín coqueteó inicialmente con impulsar un club de deudores, pero retrocedió finalmente cediendo en toda la línea a la presión del imperialismo y del establishment local.

Las renegociaciones en todos los casos incluyeron compromisos de apertura económica, liberalización de los flujos de capitales, y venta de empresas estatales a consorcios de capitales privados con peso dominante de empresas multinacionales. Además permitieron jugosos negocios a los intermediarios, grandes bancos internacionales. Desde el plan Brady hasta el Canje de 2010, pasando por el “megacanje” realizado por Cavallo en 2001, todos están plagados de denuncias por las ganancias fraudulentas de los intervinientes.

Que la deuda contraída y acrecentada desde 1983 es resultado de la deuda del período 76-83 es algo admitido incluso por funcionarios del gobierno de Menem como Jorge Rodríguez, entonces Director del Departamento de Deuda Externa del Banco Central.

Desde 1976 hasta hoy, la Argentina lleva pagados, haciendo una suma simple, unos USD 546 mil millones en capital e intereses (el primero en realidad fue mayormente refinanciado), que si actualizáramos a los precios de hoy sería mucho más. Estos se distribuyen de la siguiente manera: durante el “proceso”, se saldaron USD 30 mil millones, durante el gobierno de Alfonsín USD 35 mil millones, durante los dos mandatos de Menem USD 116 mil millones, bajo el gobierno de la Alianza USD 44 mil millones, durante la presidencia interina de Duhalde USD 17 mil millones, en los años de Néstor y Cristina Kirchner USD 200 mil

millones, y en lo que va del gobierno de Macri USD 104 mil millones. A pesar de esto, la deuda es actualmente, tras el acuerdo con el FMI, de alrededor de USD 400 mil millones. Es decir que se multiplicó por 50 desde 1976.

Néstor Kirchner encaró en 2005 la renegociación de la deuda en default desde diciembre de 2001, dando la espalda a los extendidos reclamos por la investigación y nulidad de dicha deuda fraudulenta y usuraria, lo cual había sido incluso avalado en 2000 por el mencionado fallo judicial del Juez Ballesteros en la causa iniciada por Alejandro Olmos. La reestructuración de los pasivos fue presentada por el gobierno como el resultado de una firme postura soberana, por haber negociado una elevada quita nominal, que era según el gobierno del 75 % sobre el valor nominal de los títulos impagos. En verdad era de alrededor del 54 %, similar a la que había pactado Rusia en 1999 (53 %). Pero esta quita nominal ocultaba el hecho de que los cupones sumaban una deuda flotante de hasta 30 mil millones de dólares, por cupones atados al crecimiento del PBI. Integrando esto en la ecuación, la quita efectiva fue casi nula.

La meta de volver “soberanamente” a los requerimientos del capital financiero internacional era y es una contradicción en los términos. Tanto como lo fue la pretensión de que es un acto soberano “desendeudarse”, término pomposo para decir que la clave era saldar deuda con dinero contante y sonante (pesos o dólares) para reducir la carga de los pasivos, pagando “serialmente”. Una noción que poco tiene que envidiarle a la promesa de Nicolás Avellaneda en 1877 de honrar las deudas de aquel entonces “con el sudor y la sed de los argentinos”. Durante los gobiernos kirchneristas se transfirieron decenas de miles de millones de dólares (USD 200 mil según afirmó Cristina Fernández en más de una oportunidad) a los acreedores, restando recursos del presupuesto para otros fines más urgentes y drenando las arcas del Banco Central de reservas, lo cual contribuyó a la escasez de dólares que empujó al cepo cambiario entre 2012 y 2015.

Si en los primeros tiempos kirchneristas de superávit externo la Argentina se desendeudaba, con el fin del sobrante de dólares por exportaciones volvió con todo el recurso al endeudamiento en dólares de la mano de Macri. Este giro no es una novedad. Este mismo movimiento pendular lo ha recorrido la clase dominante argentina en varias oportunidades de acuerdo a los vaivenes del saldo exportador y de la liquidez circulante en los mercados financieros globales. Como ayer, el país no se endeuda sólo para cerrar la brecha comercial, sino para cubrir el peso del endeudamiento previo, y solventar la sangría de dólares de los

capitales locales y extranjeros que fugan sus ganancias. Según cálculos recientes, tras la devaluación de agosto/septiembre la deuda pública ya sería de un 82% del PBI⁹. En la región esta proporción solo es superada por Brasil (83%), mientras que para México es de un 53%, para Colombia de un 49% y para Bolivia de un 42%.

En el primer trimestre de este año la deuda pública, quitando los montos que continúan en litigio, era de USD 328.577 millones, lo que marca un crecimiento de 106 mil millones desde que asumió Macri (en diciembre de 2015 la deuda “performing” o regularizada estaba en U\$S 222.703 millones), un incremento de 48 %. Pero desde entonces se ampliaron las emisiones de deuda privada por varias decenas de millones de dólares, y se acudió al FMI, que prestará al menos USD 50 mil millones (que podrían ampliarse a USD 65 mil millones). El 80 % de la deuda emitida desde que asumió Macri es en dólares y con acreedores extranjeros. Lo que significa que sólo puede saldarse consiguiendo dólares, de los cuáles hoy el país tiene déficit.

La deuda crece en relación al PBI y lo seguirá haciendo en los próximos años. Cada vez más recursos son necesarios para pagar los intereses que la misma genera. De acuerdo a un memo del presentado por el Ministerio de Hacienda, los intereses crecerán del 2,9 % del PBI en 2018 a 3,2 % en 2019, unos \$ 593.000 millones.

Ya el propio hecho de haber tenido que acudir al FMI implica la existencia de un riesgo de “default”, expresado también en el rápido fracaso (menos de tres meses de firmado) del primer programa acordado con el Fondo y el crecimiento del “riesgo país”, que al momento que cerramos este trabajo está en 620 puntos.

Para tener una idea de cuánto significa el pago de la deuda, bajo el gobierno de Macri los acreedores recibieron el equivalente a 28 presupuestos universitarios. Es evidente que con la succión de recursos permanente que significa el pago de esta deuda es imposible la superación del atraso nacional. Insistimos, de una deuda cuyo salto se produjo para favorecer los negocios de los grupos económicos y no para compensar un supuesto “exceso de gasto público”, como dicen sin ningún fundamento empírico los economistas liberales.

La fuga de capitales y el papel de la banca privada

La fisonomía del sistema financiero de cada país está determinada por las características que adquiere la acumulación capitalista nacional. No sorprende entonces que el sistema financiero

⁹ María Iglesia, *Alarma por suba de la deuda ya representa casi el 82 del PBI*, El Cronista, 10-09-2018. Disponible en <https://www.cronista.com/economiapolitica/Alarma-por-suba-de-la-deuda-ya-representa-casi-el-82-del-PBI-20180909-0033.html>

argentino sea raquítico, considerando la fuerte dolarización de activos por parte de la gran burguesía, que alcanza niveles que superan ampliamente los promedios de otros países, incluso dependientes y atrasados. A esto se agrega que está fuertemente enfocado en la financiación del Estado y del Banco Central. El crédito al sector privado ronda el 14 % del PBI, cuando en Uruguay llega a 28 %, en México a 35 % y en Brasil a 62 % (en EE UU el nivel es de 193 %).

Desde la reforma de entidades financieras implementada en 1977 por la dictadura militar, se apuntó a la desregulación del sistema como vía supuestamente para incentivar su desarrollo. Las tres patas de los profundos cambios fueron la desregulación de la tasa de interés para aumentar la oferta de crédito; el incentivo a la entrada a un mayor número de instituciones financieras en el mercado para volverlo “competitivo”, y la liberalización de la cuenta capital permitiendo la libre entrada y salida de capitales.

Como muestra el nivel de créditos en relación al PBI, ningún desarrollo surgió de estas iniciativas. En cambio, sí se logró una híper concentración del sistema. Hoy los 10 bancos privados más grandes, de los cuales 6 son extranjeros, concentran el 45 % de los depósitos del sistema financiero. Incluyendo a los tres bancos públicos más grandes (BNA, Provincia de Buenos Aires, y Ciudad de Buenos Aires) se llega al 83 % de los depósitos. Los 6 bancos extranjeros más grandes administran el 70 % de los depósitos y poseen el 55 % de los activos que totalizan las 10 principales entidades privadas.

En la Argentina, como en todo el mundo, el sistema financiero se moldeó en las últimas décadas jerarquizando la vehiculización de ganancias rápidas tanto del capital productivo como, especialmente, del abocado a operaciones financieras. También fue una pata fundamental para la estrategia de colocación de fondos en activos a resguardo de los vaivenes de la economía local, es decir la fuga de capitales. Los bancos globales, muchos de los cuales cuentan con una importante presencia en el país, operan activamente para favorecer la evasión impositiva y el resguardo de los patrimonios del fisco, a través del sector de “banca privada”. También son partícipes en maniobras de lavado de dinero.

Las entidades financieras cumplen un papel clave en la transferencia hacia “guaridas fiscales” de los activos financieros no declarados ante las autoridades fiscales de personas ricas y grandes empresas, a la vez que manteniendo en completa confidencialidad su origen, los valores implicados, su circulación y titularidad. El secreto bancario es la excusa para la promoción y utilización de las “guaridas fiscales”.

La Comisión Especial Investigadora de la Fuga de Divisas en Argentina en el año 2001 de la Cámara de Diputados, que funcionó desde febrero de 2002, documentó el rol jugado por el sistema financiero en la fuga de capitales durante la crisis de 2001. Durante ese año se registraron transferencias de divisas al exterior (del Sector Privado No Financiero y sin contemplar las operaciones de comercio exterior) por USD 30 mil millones de dólares. El 85 % de las transferencias fueron realizadas por empresas y el resto por personas físicas. La banca privada extranjera concretó el 75 % de los montos transferidos al exterior durante el año 2001. Los tres bancos extranjeros más activos fueron el HSBC, Citibank y Río. La cúpula empresarial explica casi la mitad de los fondos fugados, y eso es solo considerando las operaciones en las que intervinieron estas tres entidades, con lo cual el alcance de los grandes empresarios como protagonistas de la fuga puede inferirse que es mucho mayor. Los mismos bancos que contribuyeron con su accionar al quebranto del sistema financiero en diciembre de 2001, recibirían sin embargo durante 2002 compensaciones por más de USD 20 mil millones ante la “pesificación asimétrica” implementada por Duhalde, que premió a los grupos capitalistas locales estableciendo el valor de las deudas contraídas antes de la devaluación a 1 peso por cada dólar.

La información brindada en 2014 por el ingeniero en informática ítalo-francés Hervé Falciani que se desempeñaba en el HSBC, la autodenuncia del ex ejecutivo del JP Morgan Chase de Nueva York Hernán Arbizu sobre su rol jugado en la evasión fiscal y fuga de capitales a través de operaciones de “banca privada” durante los años 2000, así como el descubrimiento en 2009 de una operatoria similar sin declarar por parte del BNP Paribas, son algunas muestras que un accionar que ha sido permanente por parte de la banca.

No sólo las maniobras ilegales gangrenan la economía, el vaciamiento de recursos orquestado por el sistema financiero durante las últimas décadas fue en buena parte visible y costó cientos de miles de millones de dólares. Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner también toleraron este vaciamiento hasta que se quedaron sin dólares suficientes del comercio exterior para pagar la deuda. Recién entonces implementaron, junto al cepo, un escrutinio mayor de las maniobras de los bancos. Pero ni esto, ni los intentos de mayor regulación del sistema a través de la modificación de la Carta Orgánica del BCRA cambiaron la dinámica del sector ni su rol en la fuga de activos, a tal punto que cuando Cristina Fernández entregó el poder a Mauricio Macri las reservas del Banco Central habían llegado a solo USD 25 mil millones, siendo solo una parte de este total reservas reales o líquidas.

Varias estimaciones señalan que son USD 400.000 millones los activos de argentinos en el exterior que figuraban sin declarar, de los cuales gran parte están depositados en “guaridas fiscales”. En el último “blanqueo de capitales” se reconoció la existencia de USD 120.000 millones que los más ricos de este país evitaron declarar mediante maniobras de evasión y elusión impositiva. Pero la fuga de capitales es un fenómeno que sigue ocurriendo a toda máquina: solo en abril se fueron USD 3929 millones y en mayo USD 6213 millones¹⁰, unos USD 210 millones por día. Es decir, que en mayo se fugaron casi dos presupuestos universitarios. Desde que asumió Macri la salida de capitales alcanza los USD 54 mil millones.

En un trabajo frecuentemente mencionado, Eduardo Basualdo y Matías Kulfas demostraron la relación que existe, particularmente desde la llegada al poder de la dictadura cívico-militar de marzo de 1976, entre fuga de capitales y endeudamiento externo¹¹. En esta elaboración se muestra con claridad que

la fuga de capitales, lejos de representar un fenómeno aislado y vinculado con una ‘diversificación de inversiones’ inherente a la generalidad de agentes económicos, o a coyunturas adversas (o de ‘alto riesgo’), forma parte de una lógica de acumulación cuyo origen se asocia con las transformaciones estructurales resultantes de la política económica implementada por la dictadura militar a partir de 1976.

Entendiendo por fuga de capitales al mecanismo mediante el cual los residentes en el país, ya sean empresas o personas, remiten de manera lícita o ilícita una porción del excedente generado en la economía nacional por fuera del circuito económico local, incluyendo a la moneda extranjera acumulada en domicilios particulares o en cajas de seguridad.

Un trabajo más reciente¹² analiza que pasó con este proceso durante los años kirchneristas y el primer año y medio de gobierno de Mauricio Macri. En él se muestra diferenciado en cinco períodos la comparación del monto total de fuga de capital anual con el crecimiento también anual de la deuda externa. Para el período 1975-1983, la fuga de capitales tuvo un crecimiento

¹⁰ Nicolás Litvinoff, *Fuga de capitales: ¿qué es y cómo nos afecta?*, La Nación, 26-06-2018. Disponible en <https://www.lanacion.com.ar/2147489-fuga-de-capitales-que-es-y-como-nos-afecta>

¹¹ Eduardo M. Basualdo y Matías Kulfas, *Fuga de capitales y endeudamiento externo en la Argentina*, trabajo presentado en el Seminario “La globalización económico-financiera y el impacto en la región, las estrategias de regulación y las respuestas sociales y políticas del movimiento popular”, CLACSO y ATTAC-Argentina, junio de 2000.

¹² Magdalena Rúa y Nicolás Zeolla, *Desregulación cambiaria, fuga de capitales y deuda: la experiencia argentina reciente*, en Revista Problemas del Desarrollo, 194 (49), julio-septiembre 2018.

promedio anual de USD 7.872 millones y el endeudamiento externo de USD 9.525 millones. Entre 1984 y 1989, los valores promedio fueron respectivamente de USD 1.811 millones y USD 3.041 millones. Entre 1990 y 2001 los valores se elevaron a USD 9.126 millones para la fuga de capitales promedio y USD 8580 millones por año de crecimiento de la deuda externa. Entre 2002 y 2015, la relación cambia. Mientras los valores de la fuga de capitales pegan un salto a un promedio anual de USD 13.556 millones la deuda tiene un aumento promedio de USD 3.425 millones anual, lo que se explica por la política de “desendeudamiento” mediante el pago contante y sonante a los acreedores, con recursos provenientes del superávit comercial y, según los años a considerar, reservas del BCRA. Finalmente, durante 2016 (ya bajo la presidencia de Mauricio Macri) la fuga fue de USD 18.956 millones y el crecimiento de la deuda fue de un exorbitante USD 39.830 millones. Si consideramos lo ocurrido posteriormente a este trabajo, en 2017 el endeudamiento fue aún mayor, de unos USD 52.000 millones y de USD 20 mil millones solo en primer trimestre de 2018, antes de la nueva deuda que significó el acuerdo con el FMI.

Como bien muestran los autores, lo ocurrido en lo que va del gobierno de Macri desmiente la explicación “ortodoxa” respecto de la fuga de capitales, que es analizada como producto del entorno de incertidumbre existente a escala nacional. Según este enfoque, eliminadas las regulaciones en pos de una libre adquisición de divisas y recompuesta la “confianza en las instituciones”, la salida de fondos al exterior debería revertirse. Nada de esto ocurrió en nuestro país y no tuvimos “lluvia de inversiones”. La fuga de capitales no hizo más que acelerarse, a la par que se multiplicaba exponencialmente el endeudamiento externo. Esto muestra el carácter estructural que tiene la fuga de capitales en la forma particular que tiene la acumulación capitalista en nuestro país. Esta no corresponde a un fenómeno aislado y exógeno como son los vinculados a la diversificación de inversiones o a las coyunturas económicas y/o políticas adversas, sino que, forma parte de un fenómeno estructural endógeno en un determinado modo de acumulación del capital, como acertaron en señalar Basualdo y Kulfas en el trabajo antes mencionado y resaltan Rua y Zeolla. Sin embargo, estos últimos creemos que no dan relevancia a un dato que surge de su mismo trabajo y es la continuidad del proceso de fuga de capitales durante todo el período kirchnerista. Según sus propios cálculos el monto habría sido de USD 176.228 millones, sumando a los doce años de gobiernos kirchneristas un año de interinato de Eduardo Duhalde. Esto es relevante porque muestra que si con las políticas de desregulación la fuga se financia con endeudamiento esta se sostiene en base a capturar los recursos de los episódicos años de superávit comercial y con

la liquidación de las reservas. Es decir, muestra también la inviabilidad del esquema diseñado por el kirchnerismo para contener la fuga de capitales y cuando se enfrentó a la “restricción externa”. Sin nacionalización de la banca, la economía nacional continuará conviviendo con este fenómeno.

El control oligopólico del comercio exterior

En un país dependiente como la Argentina los saldos en moneda extranjera son un insumo fundamental. Sin ellos no funciona gran parte de la producción. Las decisiones de compras y ventas, resolver qué necesita importar el país y qué no, qué se puede exportar sin desabastecer a la población ni generar aumentos de precios internos, son decisiones que hoy quedan al libre arbitrio de un puñado de grandes exportadores.

En nuestro país existe un verdadero control oligopólico privado del comercio exterior. Dentro de las grandes empresas, son unas pocas decenas las que concentran entre la mitad y dos tercios de las exportaciones del país. En algunos casos como las cerealeras, la exportación es realizada desde sus propios puertos, desde que estos fueron privatizados en los años '90. Sobre el Río Paraná tienen sus puertos Cargill, Bunge, AGD, Vicentín, Dreyfus, Toepfer (Alemania), Molinos Río de La Plata y Nidera.

Cargill posee una flota propia y en Argentina opera la Terminal 6 de Puerto San Martín, una de las plantas más eficientes del mundo. Algo similar ocurre con Bunge. Estas multinacionales actúan en función de ejes estratégicos definidos en sus casas centrales en estrecha relación con los Estados a los que pertenecen. Estos fijan las condiciones a toda la cadena de valor hasta llegar al productor primario. Un cuarto del comercio exterior de Argentina corresponde al complejo sojero.

En 2017 los cinco principales exportadores de granos y subproductos del agro concentraron casi el 57 % de las ventas totales al exterior. Las multinacionales Cargill, Cofco, Bunge, Dreyfus y la argentina AGD fueron las empresas del top five de las exportaciones, con una participación del 14, 13, 11, 10 y 9 %, respectivamente. Esta concentración se reproduce de manera similar en la exportación de aceites y pellets de soja. Situaciones semejantes se observan en el resto de las exportaciones argentinas, donde multinacionales mineras y automotrices dominan la situación.

El desarrollo de cadenas de valor globales, en las cuales la argentina tiene una integración significativa sólo en el caso del sector agroalimentario, automotriz (en las etapas finales) y

algunos pocos sectores más, las multinacionales realizan un comercio administrado entre sus filiales apelando a precios de transferencia. Los precios de transferencia permiten aumentar los costos en las jurisdicciones de alta tributación y transferir las utilidades a las casas matrices, muchas veces a través de guaridas fiscales, las cuales ofrecen el beneficio de tener bajas o nulas tasas impositivas y un elevado nivel de secretismo. Otros mecanismos como los créditos entre filiales también pueden permitir encubrir giros de ganancias hacia países con menor presión impositiva a los fines de reducir los pagos de impuestos. Sólo en el complejo sojero, se detectaron diferencias de valores de hasta 10 % en algunas operaciones.

Las cerealeras exportadoras también hicieron grandes negocios cada vez que se produjo un aumento en las alícuotas de los derechos de exportación (retenciones), pagando menos por los granos por operaciones concretadas antes de la suba.

Todas las medidas de regulación del comercio exterior tomadas durante el kirchnerismo estuvieron muy por detrás de experiencias anteriores, como fue el caso Perón en su primer gobierno con el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) y la Junta Nacional de Granos. Estas iniciativas, a su vez, tuvieron un carácter muy limitado al no ser parte de un plan de conjunto para atacar las raíces de la dependencia. Lejos de ser una palanca de desarrollo, el IAPI terminó subsidiando a molinos harineros, refinerías de aceite y plantas de extracto de quebracho, sin aportar para la adquisición de tecnología que permitiera superar el atraso industrial. Tampoco tenía control efectivo sobre sus operaciones y estaba sometido a fuerte presión de los grupos de interés. Y los “cupos” de importación favorecieron todo tipo de negociados, al punto que se desarrolló un sector capitalista que se enriqueció con la venta de los mismos gracias a sus relaciones con el gobierno, la famosa “burguesía cupera”.

Por ello el monopolio estatal del comercio exterior es la alternativa real para enfrentar esta situación.

Los dueños de la tierra

En las últimas décadas la agricultura se ha convertido en la actividad agropecuaria preponderante en el país, relegando a la ganadería (cuyo retroceso se agravó por la crisis del sector durante los años 2000 aunque con cierta recuperación los últimos dos años). La creciente tecnificación de las labores fue acompañada por un aumento en la escala media necesaria para optimizar la rentabilidad. Grandes sociedades agropecuarias, que a la vez establecen variadas formas de asociación transitoria (como Unión Transitoria de Empresas,

pool de siembra, etc.), comandan cada una varias decenas de miles o hasta cientos de miles de hectáreas, en muchos casos teniendo en propiedad sólo una fracción de la superficie que administran. De esta forma, muchos propietarios de parcelas medias o pequeñas, pasaron de ser productores a ser rentistas, en una relación inversa a la que caracterizaba al campo argentino 100 años antes (cuando los productores arrendaban 50 ha o hasta 100 ha a los grandes propietarios para desarrollar una producción capitalista en pequeña escala).

En esta transformación, un núcleo de grandes propietarios protagonizó la reconversión del agro argentino, siendo activos impulsores de los nuevos métodos de producción en alianza con los grandes jugadores globales del negocio de la semilla y los agroquímicos. La leyenda de los “chacrers”, emprendedores no tradicionales que habrían sido los protagonistas de la “revolución” de la soja, pasa por algo el protagonismo de la gran propiedad terrateniente en algunas de las principales sociedades agropecuarias.

El Censo Nacional Agropecuario (CNA) analiza la propiedad tomando como unidad de análisis la Explotación Agropecuaria (EAP). De acuerdo con los últimos CNA (1988, 2002 y 2008) la tendencia es a la disminución en el número de Explotaciones Agropecuarias, particularmente de menores a 500 hectáreas. Pasamos de tener en el año 1988 421.221 empresas agropecuarias a 333.533 en 2002, es decir, 87.688 menos, y 276.581 explotaciones en 2008, o sea 56.952 explotaciones menos que en 2002. La información parcial disponible del CNA 2008 impide realizar un mayor análisis sobre la concentración, que sí puede hacerse con los datos de 2002. Si nos centramos en las EAP de más de 10.000 has, 20 veces el tamaño de explotación mínima óptima en el oeste de la provincia de Bs. As, vemos que en 2002 2.787 EAP superaban este tamaño. Estas sumaban 63 millones de hectáreas de las casi 175 millones de ha que sumaban todas las EAP del país. O sea que menos del 1% de las EAP abarcaban 36% de la tierra de uso agropecuario del país. Limitando el análisis a la Provincia de Buenos Aires, el 1 % de las EAP más grandes, 477, que son las de extensión de 5.000 ha o superior, alcanzan el 16 % de las hectáreas de uso agropecuario provincial.

Otros estudios que analizan las vinculaciones de propiedad entre distintas EAP, ponen en evidencia el alcance todavía más pronunciado de la concentración de la tierra hasta bien entrados los años '80. Son 1.250 propietarios (incluyendo individuos y sociedades) los que poseen 8 millones 700 mil has en la Provincia de Buenos Aires, el 32 % de la superficie cultivable. A nivel nacional, serían 4.000 los grandes propietarios que concentran esta proporción de tierra en sus manos.

Aunque los grandes terratenientes fueron —y siguen siendo— tanto propietarios como productores, su “posición estratégica” está en la propiedad del suelo, base de su principal fuente de enriquecimiento: la renta agraria. Durante el boom agropecuario de los años 2000, y a pesar de que las retenciones se apropiaron de una porción de la renta (hasta que fueron eliminadas en 2015 excepto para la soja), los propietarios agropecuarios concentraron en sus manos una alta proporción del valor de la producción agraria, equivalente a no menos del 40 % de la cosecha en tierras arrendadas por el solo hecho de ser los poseedores de esos enormes volúmenes de tierra. A nivel agregado de toda la producción agraria, la renta del suelo destinado al uso agropecuario alcanzó un valor equivalente al 2 % del PBI desde los años 2000. De esto, un tercio (entre USD 3 y 5 mil millones dependiendo los precios de los granos en el mercado mundial) fueron a mano de los grandes terratenientes por el sólo hecho de monopolizar este recurso fundamental.

Existe entonces la apropiación de una formidable masa de riqueza por parte de los grandes propietarios terratenientes. Cortar con el reparto de esta riqueza social que hacen la burguesía terrateniente, los rentistas, pools, y demás capitalistas de la cadena agroalimentaria es una cuestión básica para cualquier aspiración de transformar de la sociedad a favor de los intereses del pueblo trabajador. Esta riqueza que hoy tiene como destino la fuga de capitales y el consumo suntuario de unos pocos podría ser empleada, por ejemplo, para satisfacer las carencias en la salud y la educación pública, o la necesidad de vivienda de las 3,5 millones de familias que se encuentran en emergencia habitacional. De ahí el planteo de la necesidad de expropiar la gran propiedad agropecuaria, comenzando por los 1.300 grandes propietarios bonaerenses y sus homólogos nacionales (alrededor de 4.000). Las retenciones o cualquier otro gravamen para apropiarse de renta sin afectar la propiedad, significan sólo discutir una pequeña parte de ésta, y dejan en pie el poder social de este estrato que contribuye a perpetuar las condiciones de dependencia a las que está asociado su enriquecimiento. Liquidar a este pivote central en la articulación del agropower, permitirá también discutir una organización de la producción agraria que ponga el acento en las demandas sociales postergadas, el cuidado del medio ambiente y la recuperación de actividades abandonadas por no ser tan rentables como la soja y otros cultivos agrícolas de exportación, terminando además con las consecuencias nefastas en la salud de la población expuesta a los agrotóxicos.

A modo de conclusión

Así como lo hacen a nivel mundial, los “teólogos” del liberalismo utilizan un falso diagnóstico respecto de las causas de la decadencia nacional para justificar la aplicación de una política económica que implica transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia la clase dominante y hacia sectores del capital financiero internacional. Contra esa visión que explica el endeudamiento externo y la alta inflación como producto de un “exceso de gasto público” (“gastamos más de lo que generamos”) hemos contrapuesto una explicación donde el salto en la decadencia nacional es producto de la aplicación de la entrada de nuestro país en el ciclo “global” del neoliberalismo, con la aplicación de parte de esas “recetas” durante la dictadura militar y su continuidad (y profundización en el caso de las privatizaciones) en gobiernos civiles posteriores. El aumento exponencial del endeudamiento público, y la transformación del pago de la deuda en el ordenador de la política económica fue producto especialmente de garantizar los ingresos de los grupos económicos que operan en el país, con la estatización de la deuda privada, y el fortalecimiento del aparato represivo de la dictadura, y no de no poder cubrir los gastos sociales del estado o los salarios y las jubilaciones del sector público. Esto se complementó con una política de desregulación financiera que permitió el auge de los negocios especulativos del capital y la fuga permanente de divisas, que de ahí en más se ubica como un comportamiento persistente y estructural de la clase dominante. Hemos señalado cómo esta fuga continuó a niveles elevados durante los gobiernos kirchneristas y cómo se ha acelerado más aún con la llegada al gobierno de Mauricio Macri. Junto al endeudamiento y la fuga de capitales hemos planteado la apropiación de la renta agraria (el principal ingreso por exportaciones del país) por un puñado de propietarios y grandes exportadores como otro de los factores centrales que explican la carencia de recursos para utilizar en la satisfacción de las necesidades sociales. Por una cuestión de espacio no desarrollamos el papel que juega el control privado de gran parte de los recursos hidrocarburíferos y la continuidad de las privatizaciones en la provisión de gas y energía eléctrica. Si este es el diagnóstico, la política para terminar con el atraso y la dependencia es claramente opuesta a la que pregonan el actual gobierno y el FMI pero también de las regulaciones limitadas aplicadas por las gestiones kirchneristas. Sin dejar de pagar una deuda pública ilegal e ilegítima; sin la estatización del sistema bancario y del comercio exterior; sin la expropiación de la gran propiedad terrateniente; y sin establecer el monopolio estatal de todo el sector hidrocarburífero y toda la cadena de provisión energética y de los servicios esenciales bajo gestión de los trabajadores, solo continuaremos en el espiral de decadencia a la que nos ha conducido la clase dominante.

21-09-2018